



LA IGLESIA NECESITA UN LENGUAJE MÁS MATIZADO EN LA INDIA

Con los cambios de liderazgo dentro de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, existe una oportunidad para la reflexión.

El nuevo arzobispo de Bombay, John Rodrigues. (Foto: Archivo UCAN)

Por John Dayal

Publicado: 28 de enero de 2025 04:26 GMT

Actualizado: 28 de enero de 2025 05:19 GMT

El retiro del cardenal Oswald Gracias como arzobispo de Bombay (Mumbai) y la elevación del obispo coadjutor John Rodrigues como pastor de la diócesis católica más grande y rica de la India es un acontecimiento trascendental.

Se produce un cuarto de siglo después del liderazgo del arzobispo Alan de Lastic de Delhi, quien asumió la presidencia de la Conferencia de Obispos Católicos de la India (CBCI) en un momento crítico en la historia del país.

El ex líder del Partido Bharatiya Janata (BJP), Atal Bihari Vajpayee, acababa de convertirse en primer ministro de la India después de décadas de gobierno del Congreso, con sólo un breve interludio de gobiernos de coalición de corta duración.

La instalación del gobierno del BJP, comprometido con la agenda ideológica y política de su organización matriz —el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS o cuerpo nacional de voluntarios)— presentó a la Iglesia dos desafíos.

En primer lugar, ¿cómo se puede abordar esta nueva realidad política? En segundo lugar, la cuestión igualmente importante de cómo incorporar a la vasta y compleja sociedad civil de la India, centrándose en los aspectos seculares y fraternales de la Constitución india y el Estado de derecho.

Esto fue importante porque el país aún estaba saliendo del trauma de la violencia desatada tras la demolición de la mezquita Babri en Ayodhya, ahora el sitio del nuevo templo de Ram, inaugurado por el primer ministro Narendra Modi en 2024.

El enfrentamiento entre la mayoría hindú y los musulmanes, la segunda comunidad religiosa más grande de la India, creó una situación volátil para las minorías más pequeñas, en particular los cristianos.

En ese momento, los cristianos sumaban alrededor de 30 millones, aproximadamente el 2,3 por ciento de la población, un número suficientemente grande como para tener importancia política, particularmente en Kerala y tres estados del noreste, pero demasiado pequeño en otros lugares como para ejercer una influencia significativa.

Al igual que hoy, en los años 90 la sociedad civil parecía desorganizada, incapaz de responder adecuadamente a la demolición de la mezquita y al trauma que había causado entre los musulmanes. La sensación de impunidad que fomentó persistió, a pesar de que técnicamente el Congreso estaba en el poder bajo el mando del Primer Ministro PV Narasimha Rao, quien, como es bien sabido, “se quedó dormido” durante lo que podría considerarse la crisis más importante de la política india desde la violencia de la Partición en 1947.

Una de las primeras pruebas a las que se enfrentaron las minorías religiosas fue la de cómo responder a la agresiva campaña a favor de un Código Civil Uniforme (UCC), que Vajpayee promovió con vehemencia. Su única respuesta tras visitar los Dangs en Gujarat —donde activistas hindúes quemaron tres docenas de iglesias de miembros de tribus— fue convocar un debate nacional sobre las conversiones religiosas.

Sus comentarios envalentonaron a los grupos Hindutva, que intensificaron sus ataques verbales. Mientras tanto, el Papa Juan Pablo II había llegado a la India para publicar su exhortación apostólica, *Ecclesia in Asia*.

Ante estos desafíos, el arzobispo de Latic, después de mucho debate con sus asesores y grupos de la sociedad civil, adoptó una postura firme. Como presidente de la conferencia episcopal nacional, afirmó que los debates sobre las conversiones, la UCC y otros temas similares ya habían tenido lugar en la Asamblea Constituyente. Estos asuntos se habían resuelto mediante un análisis cuidadoso, y muchos miembros hindúes insistieron en que se garantizara a las comunidades el derecho a propagar su cultura, incluida la fe, y a establecer instituciones para preservar su patrimonio.

La sociedad civil apoyó en gran medida esta postura, ya que se alineaba con luchas más amplias por la libertad de expresión, el derecho de reunión, la negociación colectiva, un salario digno y la justicia de género. Si bien pocas mujeres participaron directamente en la redacción de la Constitución, las que lo hicieron se manifestaron en favor de estos derechos.

Sin embargo, hoy en día la inclusión en el discurso público está desapareciendo. El lenguaje de interacción entre las minorías religiosas y el Estado se ha vuelto confrontativo. El gobierno y el partido gobernante siguen impulsando su agenda política mayoritaria, dejando a las minorías religiosas, en particular a los cristianos y los sijs, luchando por hacer valer sus derechos constitucionales.

Las comunicaciones de las instituciones católicas —ya sea la CBCI o la Conferencia de Obispos Católicos de la India (CCBI), el organismo de rito latino— a menudo parecen tener un enfoque limitado. No se trata sólo de líderes comunitarios u obispos que buscan mayores cuotas de producción de caucho en Kerala o protección para los cristianos en áreas remotas. Se trata del entorno sociopolítico más amplio en el que un gran número de cristianos indios, especialmente los que trabajan en Asia occidental, han construido sus vidas durante las últimas cuatro décadas.

También persisten tensiones dentro de la Iglesia católica por cuestiones de ritos y diferencias culturales, que fragmentan a las comunidades católicas. El BJP, el RSS y el gobierno han sacado provecho de estas divisiones

internas, en particular porque las comunidades cristianas y musulmanas en la India suelen relacionarse con la política de manera diferente.

En los últimos 25 años, desde que Vajpayee llegó al poder, cristianos y musulmanes rara vez han podido formar un frente unido, incluso en materia de derechos constitucionales fundamentales.

La brecha ideológica entre las perspectivas cristianas y musulmanas en la India ha confundido aún más a la sociedad civil. Para que esta sea eficaz, todos los grupos religiosos, independientemente de su tamaño, deben trabajar juntos, junto con quienes se oponen al establishment gobernante y las comunidades marginadas que carecen de voz política.

Sin embargo, la sociedad civil suele distanciarse de las minorías religiosas, ya sea dejándolas libradas a su suerte o desestimando sus preocupaciones como “posiciones extremistas”. Como resultado, el BJP y el RSS han explotado eficazmente las divisiones entre las minorías religiosas.

Muchos cristianos, que no están dispuestos a alinearse abiertamente con los musulmanes, han permanecido en silencio o, en algunos casos, incluso han apoyado la postura del BJP-RSS contra ellos.

Esto ha sido evidente en cómo las leyes anticonversión, inicialmente diseñadas contra los cristianos, fueron luego ampliadas para centrarse en los musulmanes.

Varios estados, incluidos Uttar Pradesh, Chhattisgarh y Karnataka, introdujeron leyes que penalizan las conversiones mediante “fuerza, fraude o seducción”, términos definidos vagamente que incluyen oraciones curativas o incluso citas de la Biblia.

Estas mismas leyes fueron modificadas posteriormente para incluir los matrimonios interreligiosos, con lo que se criminalizaron las relaciones entre hombres musulmanes y mujeres hindúes. En consecuencia, si bien algunos pastores cristianos han sido arrestados en virtud de estas leyes, el número de hombres musulmanes arrestados ha sido significativamente mayor.

A pesar de enfrentarse a una persecución similar, los cristianos y los musulmanes siguen luchando por separado y rara vez hablan con una sola voz. Incluso a los grupos de la sociedad civil que antes denunciaron la persecución (como la Unión Popular por las Libertades Civiles, PUCL), que documentó los ataques a los cristianos en el cinturón tribal de Chhattisgarh, ahora les resulta más difícil conseguir un amplio apoyo.

Con el cambio de liderazgo dentro de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, existe una oportunidad para la reflexión.

La Iglesia debe repensar su enfoque del discurso público, no sólo en relación con sus preocupaciones internas, sino también con cuestiones más amplias que afectan a todas las comunidades marginadas, entre ellas los dalits, los tribales, los ateos, los trabajadores sin tierra y los activistas medioambientales, muchos de los cuales están siendo desplazados debido a los intereses corporativos alineados con el régimen.

Este amplio y diverso sector de la sociedad está buscando aliados. La Iglesia y otras organizaciones religiosas y seculares deben considerar la mejor manera de articular sus preocupaciones. No se trata sólo de negociar las libertades religiosas, sino también de asegurar garantías constitucionales para todas las comunidades –religiosas y no religiosas– mediante una participación significativa de la sociedad civil.